

AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN  
DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIÓNES



Asturias: Queja al Defensor del Pueblo por vulneración del Derecho de Defensa del artículo 14 de la Constitución Española por parte del Gobierno de España.  
Expediente de Instrucción núm. 2026/18026, incoado por la Comisión Europea al Reino de España.

EL JOSÉ MARIA MANCHEÑO LUNA, mayor de edad, de nacionalidad española, previsto de DNI núm. 25.525.877-T, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN PLATAFORMA NACIONAL EN DEFENSA DEL SILVESTRISMO (en adelante "Plataforma"), con CIF núm. G 27.847.505, cuyos Estatutos se acompañan al presente escrito en CD como Documento núm. 1, y don'te a efectos de modificaciones en Mutua (2009), en la calle Jorge Juan, 10, en París, ante este Alto Conflicto.

EXPONGO

**Primer.- Estado de la cuestión.**

El Silvestrismo es una modalidad cultural, recreativa y deportiva de ámbito nacional que tiene como finalidad la educación en el campo de las aves de determinadas especies de Especies silvestres, en función de una charla preestablecida, para llevarlos participar en concursos en los que se evalúa la calidad del canto en armonía con una música de competición. Se trata de un arte de larga trayectoria, de honda arraigo cultural y de amplia tradición como práctica ornamentalmente conservadora de la naturaleza que se desarrolla actualmente en torno a los diversos asociaciones y federaciones silvestres, a través de las que los socios o federados pueden recibir la autorización preceptiva para poder captar aves, siempre en pequeñas cantidades, con métodos locales y seleccionados selectivos.

De este modo, los Silvestristas conciben la actividad su vida como una oportunidad de captar aves para las distintas competiciones, una que entra en juego entre concurrencias como son, la observación y conocimiento de la naturaleza y la conservación del medio rural. Por lo tanto es posible desear una, suponiendo la necesidad de esta causal de conocimiento que tienen un valor esencial para la conservación de las aves en España.

Pues bien, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres ("Directiva de Aves"), que prohíbe en términos generales la captura de aves silvestres en el medio, en su artículo

Se permite a los Estados miembros introducir excepciones a esta regla general cuando no exista otra solución satisfactoria por los planteados la caza en cautividad como solución satisfactoria, si bien (además) hay importantes organizaciones en busca de tal solución viable) y siempre que se lleve a cabo la captura bajo unas determinadas condiciones. A este respecto, la Directiva de Aves fue transpuesta a nuestra Ordenamiento Jurídico a través de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ("Ley 42/2007"). Y la aplicabilidad práctica de dicha normativa adquirió firmeza con la aprobación de las Directrices Técnicas para la adaptación de la normativa de fangidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva de Aves 2009/247/CE ("Directrices Técnicas") y el Cope Nacional aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para el periodo 2013-2018 ("Cope Nacional de Capturas"). Estas jurídicas que se completa con las Resoluciones y Órdenes que deben aprobar las Comunidades Autónomas para que los interesados silvestres puedan capturar aves, y con las distintas sentencias que desde varios Tribunales de Justicia españoles se han dictado en donde expresamente se reconoce la viabilidad legal y técnica de Silvestrismo en nuestro país.

El Silvestrismo, en suma, es una actividad fuertemente regulada y controlada. Y aunque se ha venido desarrollando respetando estos criterios, en fecha 30 de septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió un Expediente de infracción al Reino de España (Expediente de infracción núm. 2020/0202), al estimar la Comisión que por parte de algunas Comunidades Autónomas se había venido produciendo un incumplimiento de la Directiva de Aves, ya que la Comisión advierte que el Reino de España no había logrado a probar que la caza en cautividad es hecha una explotación satisfactoria alternativa a la captura, ni que la actividad se desarrolla en bajo una explotación prudente, en pequeñas cantidades y con un modo de captura selectivo. Esto es, para la Comisión Europea, dice que la caza en cautividad de las aves migratorias es posible en nuestro país, pero no estarlo que estas se sigan extrayendo del medio natural.

Tras ello, la Plataforma a la que represento ha venido enviando al Gobierno una serie de informes jurídicos, técnicos y científicos en donde se plantea que el Silvestrismo es una actividad divertida, sana y científicamente viable, a fin de que el Reino de España cumpla con las obligaciones de defensa nacional para poder responder en forma adecuada al citado Expediente de infracción. En todos y cada uno de estos informes se plantea que a raíz de la caza en cautividad a día de la fecha no existe en nuestro país y que el Silvestrismo se desarrolla bajo condiciones estrictamente controladas, en pequeñas cantidades, con medios altamente selectivos y que implican una explotación prudente.

A este respecto, en fecha 27 de mayo de 2022, la Comisión Europea emite Dictamen motivado en el que reitera no sólo que la caza en cautividad es viable en nuestro país sino que también revela que el Silvestrismo no es una actividad controlada y que el modo de captura no es selectivo ni la explotación prudente ("Dictamen motivado"). Por lo que llama al Reino de España para que en el plazo de dos meses, informe las medidas requeridas para ajustarse a dicho Dictamen ya que en caso contrario, la Comisión podrá acudir al Tribunal de

Artículo de la Unión Europea impone la correspondiente acción correctiva. Respecto al caso, el Reino de España.

Por lo tanto, tal y como se desprende del texto del Dictamen motivado, el Gobierno de España es el responsable de dicho Expediente en la medida a la Comisión el conjunto de informes que con la reforma le envió con el único objeto de constatar de correspondientes elementos de defensa en este momento. Esta inacción, un lado inactividad se provocaría una situación de indefensión frente al mencionado Expediente de infracción, no sólo al caudillo Silverista, sino a las Comunidades Autónomas que aparecen directamente señaladas en el Dictamen motivado como responsables de la Directiva de Áves.

Así, al conceder la Comisión un plazo de dos meses para la adopción de medidas necesarias para ajustarse a lo dispuesto al Dictamen, si el Gobierno de España continúa con su inactividad frente a la mencionada situación de infracción, esta situación tendrá consigo no sólo la desaparición del Silverismo en nuestro país, sino que el Reino de España además va a tener que asumir una culpa que no lo corresponde.

Por todo ello, resulta urgente la adopción de esta QJFA y su resolución por este Defensor del Pueblo por los recursos de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

#### Primeros - Cuestiones Físicas.

Llegados a este punto procede buscar la solución sobre la inactividad que ha producido la inactividad manifiesta e inmotivada del Gobierno en el asunto de este Expediente de infracción.

En este sentido la Plataforma, desde que en diciembre de 2016 se iniciase este procedimiento, ha prestado su plena colaboración con el Ministerio y con el Gobierno de España pero que podría responder a los requerimientos solicitados en el citado Expediente. Así esta parte ha ido llegando directamente al Ministerio un compendio de informes y fotos que justifican teorías, científicas y jurídicamente que el Silverismo se viene practicando de forma totalmente ajena a la Directiva de Áves, tales son:

- "Informe Titulado: *Informe sobre la viabilidad legal, inexistencia científica y el valor medioambiental del Silverismo en España.*" Que se adjunta al presente en CD como Documento núm. 2.
- "Informe al Gobierno por Comité Científico del Consejo de Fero y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente." Que se adjunta al presente en CD como Documento núm. 3.

- *"Estudio de impacto positivo y negativo: Consecuencias de la posibilidad o erradicación del Sierrochloa en España"; "El Sierrochloa en su hábitat natural: la posibilidad de la cría en cautividad de aves fringílicas en España"; y "Los Sierrochloa. Conociendo del Campo. Sierrochloa (España)"* Que se adjunta al presente en CD como Documento núm.4.

Todos estos informes respaldados por Datos científicos y técnicos sobre la materia y validados por un gran número de doctores e ingenieros en distintas ramas de conocimiento y que concluyen que a día de la fecha la cría en cautividad de las aves fringílicas en España no es una solución alternativa satisfactoria y que la aprobación de cupos por parte del Ministerio es planamente viable y sostenible con los medios de control existentes. En este sentido, el papel que adoptan las Comunidades Autónomas es fundamental ya que son ellas las que tienen que promover la aprobación de los cupos de captura y cría, en tanto, las principales responsables de las presuntas incumplimientos advertidos en el Expediente de Información. Por tanto es innegable que el Gobierno adopte una posición neutral e intente descargar sobre las Comunidades Autónomas (presuntamente incumplidoras) todo el peso del referido Expediente.

No obstante lo expuesto, resulta sumamente inesperado que el Informe Técnico-Jurídico sobre la viabilidad legal, sostenibilidad científica y el valor medioambiental del Sierrochloa en España de 19 de diciembre de 2016 (Informe<sup>4</sup>) haya sido el único del que ha tenido conocimiento la Comisión en el marco de este Expediente de Información. Pero aún más inesperado es que, tras tomar conocimiento el Informe referido, el Gobierno de España no haya respaldado el citado Informe haciendo saber las manifestaciones vertidas en el mismo y que le calza las herramientas legales, técnicas y de oficio necesarias para poder defenderlo. Y lo más triste es que el Gobierno al ignorar se pronunciara respecto de los argumentos vertidos en el Informe, lo que desde luego, realmente implica o revela una política, negligente en cuanto al mismo y esto desde luego no se puede asumir, si citada informe incluía información se puede se adjuntar:

- *"Informe emitido por IFOPNA sobre el estudio Proyecto de Investigación llevado a cabo por Dr. PABLO FLORENCIO ASTILLÁN y por Dr. MARÍA EL GUARCA NUEVO TORRES (ambos reputados profesionales de la Ecología, el Medio Ambiente y las Ciencias Biológicas) "La cría en cautividad de diferentes especies de fringílicas en España. Informe Técnico Final" remitidos en sus respectivas 2012 2013 y en una segunda remisión 2013 2014".* Que se adjunta al presente en CD como Documento núm. 5.
- *"Análisis Técnico de la viabilidad de la cría de fringílicas en cautividad"* (Exp. AG 29/EI 196), Institut Català d'Ornitologia, noviembre de 2013. Que se adjunta al presente en CD como Documento núm. 6.

- "Servicio Técnico de reproducción de tringlidos en el centro de fauna de Valencia" (Exp. AG-2014-181). Institut Català d'Omnologia, 28 de noviembre de 2014. Que se adjunta al presente en CI como Documento núm. 7.
- "Informe Técnico sobre el Silvestrismo". Federación Madrileña de Caza. D. David de la Hozaga González. Técnico superior de Gestión y Experimentación de Recursos Naturales y Paisajístico, e Ingeniero Técnico Forestal en la Universidad Politécnica de Madrid, de 2 de octubre de 2014. Que se adjunta al presente en CI como Documento núm. 8.
- "Servicio Técnico de reproducción de fragilidos en el centro de fauna de Valencia" (Exp. AG-2015-188). Institut Català d'Omnologia, 10 de diciembre de 2015. Que se adjunta al presente en CI como Documento núm. 9.
- Cartas y comunicaciones recientes de expertos técnicos y científicos independientes que venían y suscriben los anteriores informes citados de HURPCA, el CI y los nivel de la Fuerza. Que se adjunta al presente en CI como Documento núm. 10.

Se trata, todos e-los, de informes de índole científica que han estado y pretaca sobre el terreno que la cría en cautividad no es viable puesto que entre un elevado índice de mortalidad de las aves tringlidas que se someten a la cautividad y e ejercicio de la propia cría implica un riesgo innegable: la entrega a la que se pueden ver sometidas estas aves, lo que desde luego va en contra de os más esenciales principios de la Decisión de Arre, de protección y fomento de a biodiversidad. Pero lo que resulta insoportable es que muchos de esos informes fueran contrarios a la ciencia: os varios estudios realizados entre los representantes de la Plataforma y e Ministerio dando que este último siempre tomó su equívoca respecto de los mismos y alimentos que los colaba resultando a la Comisión, cuando esto no era cierto.

Terminado en cuanto lo expuesto, sin duda comprende que el único informe válido en cuanto por la Comisión Europea para emitir este Documento resultase por el Dictamen del Comité de Pesca y Fauna Silvestre sobre si resulta posible o no la cría en cautividad de las aves tringlidas que se emiten en silvestrismo para consumo de carne (Dictamen 26/2016) ("Dictamen del Comité Científico"). Trabajo cuya principal fuente de información es informes, tal y como revela su propio texto. Y es aún más notable que el Gobierno de España no quiera pagar a la Comisión el informe al Dictamen del Comité Científico del Comité de Pesca y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Resolución CC 26/2016) ("Informe al Dictamen del Comité Científico") en 20 de febrero de 2017. En este caso, un error independiente, el Ingreso de Morera, o JUAN M. Y LIRIAE, advierte de las deficiencias técnicas y científicas de los que advierte el Dictamen del Comité Científico que además no incluye suficiente en informe el estudio científico técnico alguno sobre la cría en cautividad. Desde luego, se reitera en ambos, conjuntamente, en un acuerdo a fin de que la Comisión pueda hacer una idea apropiada de cuál es la realidad del Silvestrismo en nuestro país. En suma, la Comisión recibirá una información recogida de los e-los contexto.

La Plataforma considera que es indudablemente necesario que el letrado de esa sede se defienda del Excmo. Sr. Induráin citando no sólo por la cuantiosa sesión comunitaria a la que se podría refutar sus aseveraciones, porque en guerra con el liberalismo se le venía practicando de una forma totalmente ajustada a la Directiva de Aves. Circunstancia que se ha justificado técnicamente, científicamente y jurídicamente en todos y cada uno de los informes que se han hecho llegar a esta Comisión.

Es por ello que se considera absolutamente indiscutible que el Gobierno de España abandone la posición neutral e inercial que está manteniendo en este Expediente de Infusión y haga llegar a la Comisión el conjunto de informes que esta agrupación le ha enviado y ha realizado con el único objetivo de sacar a esta Administración de los más ostentosos elementos de defensa. Sólo así el letrado de España podrá oponerse desde una posición fundamentada e investida de rigor jurídico, científico y técnico, al Dictamen motivado en este Expediente de Infusión.

En este sentido, sobre evidenciar que la evidente inactividad, desde luego inexcusable, en la que se incurrió al hecho de España podría ser reclamado por aquellas Comunidades Autónomas y colectivos que, con toda la razón, puedan sentir consagrado su derecho de defensa por un Gobierno pasivo que no les valdiera peso a que cuenta con los argumentos de hecho y de derecho, tanto técnicos, como jurídicos y científicos que evalúan el ejercicio del liberalismo en nuestro país.

#### **Segundo.- Vulneración del derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.**

La posición pasiva que ha mantenido el Gobierno de España, conlleva primeramente al derecho de defensa que tiene no sólo el colectivo liberalista representado por esta Plataforma sino también el derecho de defensa que asiste a aquellas Comunidades Autónomas reflejadas directamente en el Dictamen motivado como incumplidora de la Directiva de Aves cuando este último es la ley. En este sentido, se ha vulnerado el derecho de defensa en un doble escenario:

- En primer lugar, porque no se han remitido a la Comisión Europea todos y cada uno de los informes recibidos por esta Plataforma y que le dotaban de los instrumentos de defensa necesarios para que se archivara, positivamente, este Expediente de Infusión.
- En segundo lugar, y cabalmente relacionado con el primero, por el hecho de que el Gobierno al adjuntar e primero de los informes remitidos por la Plataforma, no se posicionó respecto de ninguno de los cuestionamientos vertidos en el mismo. Lo anterior posada de Gobierno en cuanto a este informe y al haber aportado en paralelo el Dictamen de Comité de Flora y Fauna que, aunque carencia de rigor científico, fue elaborado por un órgano del Ministerio, hace prever sin duda alguna que la Comisión iba a tener en

casos el citado sistema del Comité de Honor y Justicia iba a obviar el informe elaborado por la Plataforma. La inexistencia del sistema quedó reflejada en el propio texto del informe motivado con expresamente refiere que:

*"Las autoridades españolas adjuntan estos documentos recibidos por ellos como antes lo, pero no se corresponden al contenido y los argumentos que sustentan dichos documentos*

(-)

*Con respecto a las observaciones de la Oficina Nacional de Casos, incluidas como antes lo a la respuesta a la carta de empadronamiento, cabía señalar que siempre no hace referencias en relación con el contenido y la realidad del informe ni sobre el mismo con apoyo oficial*"

Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España es el único interesado en este tipo de Expedientes, de tal que ante debiera haber actuado y ejercido una defensa u o alianza de las circunstancias. Y no sólo no lo ha hecho, sino que además, con su actitud pasiva, se ha limitado a las acusaciones emitidas desde Europa, sin apenas intentar defenderlos cuando todo los argumentos necesarios para ello.

De este sentido, podríanse hacer una analogía con la doctrina del abogado defensor que abandona, por su inactividad, la defensa de su cliente. Así pudo caber que aquí el Gobierno en nuestra guardia fiscal a la Comisión y que desde luego, no busca ser juez y parte en este procedimiento. La actuación del Gobierno debía haber consistido en asistir a la Comisión todos y cada uno de los informes, Estatutos y trabajos de investigación que desde España se habían venido realizando sobre las cuestiones planteadas en el Expediente de infracción, y desde luego reflejar su opinión sobre estos para que la Comisión pudiera al menos hacerse una idea aproximada sobre el Silvestrismo y cómo se desarrolló en España.

Así, la protesta sancionadora de las Administraciones Públicas participa de los principios propios tanto del Derecho Penal como de las garantías del proceso penal, decido a que se trata de manifestaciones del poder judicial del Estado. Pues bien, en relación a la prohibición de indefensión en sede sancionadora, ésta de cada tiene transcendencia constitucional.

En cuanto al carácter inextinguible del derecho de defensa, en esta sede, conviene advertir que se trata de un derecho consagrado que tienen todos los ciudadanos a defenderse de toda actuación que contra ellos se formule, aunque la amplitud con la que en nuestro ordenamiento jurídico se plasma el derecho de defensa del acusado en el proceso penal hace que nuestro Tribunal Constitucional se haya pronunciado en numerosas ocasiones sobre la íntima conexión con este derecho de defensa que tienen la multitud de alegaciones que suelen verificarse ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en aras a preservar sólo derecho de defensa que tienen todos los acusados que se enfrentan en un proceso a su

Juntas Locales Públicas e instituciones. Así, lo Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 2 de noviembre de 2005, que señala que:

*"el derecho de defensa, desarrollado sustancialmente a través de la asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la CE, y del imputado, con el mismo carácter aunque no exactamente con el mismo contenido, en el artículo 24. En especial cabe señalar su defensa porque no se encuentra unida a las que el artículo 55 de la CE considera susceptibles de suspensión en casos de estado de excepción o de sitio. En el artículo 24 aparece junto a otros derechos que, aunque distintos e independientes entre sí, constituyen una historia de garantías orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un proceso con garantías, y un proceso equitativo, en términos del CEDE en definitiva, a un proceso justo".*

La indefensión, si bien es un concepto procesal referido a la actuación de los Tribunales cuando ante los mismos se queja el derecho fundamental a la defensa, es un concepto que también se presta de la actuación procedimental de las Administraciones Públicas. De este modo, estableciendo este derecho de defensa del ámbito judicial o prejudicial, estrictamente administrativo, lo cierto es que el Gobierno de España no ha llevado todas las actuaciones necesarias para defender, con las herramientas ofrecidas para que lo hiciera, a este colectivo así como a las Comunidades Autónomas provincially insularmente. Se ha mantenido al margen, figurando como un mero intermediario pasivo y no ha actuado como un representante de los intereses de sus ciudadanos, de todos sus ciudadanos, como es la vía preceptiva.

Ante esta situación, esta parte no conoce otro cauce más que este para poder verificar las circunstancias expuestas. Ha sido vía a través de la cual este colectivo puede remitir directamente a la Comisión todos los argumentos expuestos e informes adjuntos a este fin. Es por ello que se acude al Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento del Título I de la Constitución Española, tal y como reflejan los artículos 1 y 14 de la Ley Orgánica 3/1985, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

En su virtud,

**SOLICITO** a: Excelentísimo señor don Francisco Fernández Miragón, Defensor del Pueblo en funciones que tenga por prescrito este escrito, junto con sus copias se han adjuntado y, en base a las consideraciones vertidas en el mismo:

Primero.- Al, en el estar desde su Gobierno el Gobierno de España y al Ministerio competente para que abandone la actitud o ineficacia con la que ha actuado en el seno del Expediente de Instrucción núm. 2006/0028 y se abra de los

herramientas legales, técnicas y científicas que esta Plataforma le ha aportado para la defensa del Futuro de España.

**Segundo.-** Que, en caso de que el Gobierno insiste en su posición inactiva y no resuelva dichos informes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y el artículo 41.1 b) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional se interpondrá la interposición del correspondiente RECURSO DE AMPARO, en nombre de esta Plataforma por la constitución del derecho de defensa proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española.

En justicia que se pide en Madrid, a 13 de junio de 2025.



D. JOSÉ MARÍA ZAMORAÑO LUNA  
ABOGADO PLATAFORMA EN DEFENSA DEL SEVIERISMO



NACIONAL



Producto: GAFETA IDENTIFICADA		DESTINATARIO	Destinatario: PLAMAT y FERRONDELLA y FERRONDELLA FERRONDELLA	
Código postal: Código postal de destino			ZONA D-2	
Oficina de origen: 201014 - MONTE DUC 1			Código postal	
Fecha de envío: 15/05/2014		REMITENTE	JOSÉ ANTONIO MORALES OLIVERA	
Valor de envío y seguro			JOSÉ ANTONIO MORALES OLIVERA	
Impuesto a pagar: \$0.00			\$0.00	

En la ciudad de Santo Domingo, D.R.

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.

#### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, el suscrito, José Antonio Morales Olivera, declaro que soy el titular de la presente y que la misma es válida y legal.